

TESIS
3597
CUE

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CONTADOR PÚBLICO

TESINA IMPOSITIVA
INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA LEY 11.683

TUTOR: DR. RUBÉN PANTANALI

ALUMNO: GIORDANO, ANDREA FERNANDA

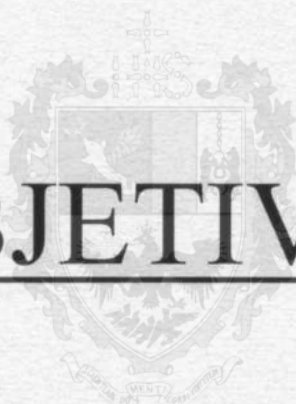
N ° CONTABLE: 954.674

2000

ÍNDICE TEMÁTICO

1) Objetivo	Pág. 1
2) Introducción	Pág. 2
3) Evolución y cambios importantes introducidos en la ley 11.683	Pág. 5
4) Ley penal tributaria	Pág. 12
5) Aplicabilidad de los principios constitucionales del Derecho Penal	Pág. 14
6) Naturaleza jurídica de las infracciones y sanciones	Pág. 25
7) Penalidades tributarias	Pág. 31
8) Bienes jurídicos protegidos por las infracciones fiscales	Pág. 38
9) Régimen sancionatorio tributario: ley 11.683	Pág. 40
10) Infracciones formales	Pág. 41
11) Infracciones materiales	Pág. 50
12) Eximición y reducción de sanciones	Pág. 58
13) Sujetos imputados y sus responsabilidades	Pág. 60
14) Intereses resarcitorios y punitivos	Pág. 64
15) Análisis final	Pág. 69
16) Bibliografía	Pág. 79

OBJETIVO



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Objetivo

En esta tesis se expondrá un análisis detallado de la normativa vigente en materia de sanciones tributarias previstas en la ley 11.683, teniendo en cuenta las modificaciones más relevantes que se produjeron a lo largo de estos últimos años, así como también los distintos antecedentes. La finalidad es poder determinar deficiencias en el sistema sancionatorio, y al mismo tiempo, establecer cuáles son los diferentes modos de incumplimiento de las obligaciones tributarias y sus consecuencias.



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN



USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Introducción

La multiplicidad de deberes en el ámbito tributario, sumada a la irrupción de nuevas obligaciones a cargo de los sujetos pasivos, ha llevado al legislador a sancionar cada vez con más frecuencia, normas represivas con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los mandatos dispuestos por la ley.

Estas leyes que en un principio eran muy severas, y después fueron moderándose hasta alcanzar nuevamente un alto grado de dureza, desarrollaron a lo largo de los últimos años una abundante doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, no todas las sanciones han conseguido su objetivo: *el aumento de la recaudación impositiva*.

La actividad de la A.F.I.P. está dirigida a fiscalizar y recaudar los impuestos nacionales que integran el sistema tributario, así como también los tributos aduaneros, y a partir del dictado del decreto 507/93 también tiene a su cargo el control y la fiscalización de los recursos de la Seguridad Social.

Creo importante destacar que cuando la Administración Fiscal tiene que organizar su actividad la debe medir en función del ámbito en que se desarrolla dicha actividad; si el ámbito es *cumplidor* sus actividades estarán orientadas a mantener ese cumplimiento, y si se trata de un medio *incumplidor* las acciones deberán ser más integrales partiendo de una capacitación para formar la conciencia tributaria, ejercer controles rígidos y aplicar sanciones para que corrijan los defectos o incumplimientos.

Es decir que la Administración tiene por objetivo básico lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, y las acciones estarán encaminadas a ello, y también a que cuando esa obligación tributaria surja de la autodeterminación o declaración jurada que presenta el contribuyente, la misma se ajuste a la realidad.

Sin un sistema sancionatorio se tornaría imposible lograr una recaudación suficiente para atender las necesidades de la comunidad. Por otra parte, se beneficiarían los infractores en perjuicio de los cumplidores de la ley.

Por otro lado, considero necesario dejar en claro en esta introducción qué es lo que la doctrina considera como *hecho ilícito*, el cual se refiere a todo acto que sea contrario a una norma jurídica. La ilicitud significa la antijuridicidad de la conducta de un sujeto y en materia tributaria, es la de un contribuyente.

Cabe destacar que, el ilícito de naturaleza *civil* se diferencia del de naturaleza *penal*, siendo el criterio fundamental que permite la diferenciación de ambos conceptos la finalidad de las sanciones que el sistema jurídico establece como consecuencia de la realización de ambos tipos de actos ilícitos.

Mientras en el ámbito *civil* se protege fundamentalmente el interés de los particulares y cuando se configura un acto ilícito la sanción correspondiente al mismo tiende a *restituir a la víctima al estado anterior al hecho*, en el ordenamiento *penal*, en cambio, se contempla el interés público y se sancionan sólo aquellas conductas que atentan contra la convivencia social, y por ende, la sanción aplicada a quien resulta responsable del ilícito penal no tiene naturaleza resarcitoria sino que tiene una *finalidad ejemplar y represiva*.

Es decir que podríamos afirmar que el ilícito penal se contrapone al ilícito civil porque su sanción es una pena.

La *sanción penal* debe aplicarse cuando la violación del orden jurídico exige una medida más grave que el puro resarcimiento, o cuando el mismo no serviría para indemnizar la lesión jurídica porque se han afectado bienes jurídicos esenciales. La sanción penal no intenta como la civil restablecer el equilibrio de patrimonio o de intereses, sino que lo que intenta es **castigar la conducta antijurídica y prevenir futuras transgresiones al orden jurídico**.

Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones tributarias acarrea consecuencias no sólo civiles (resarcimiento del daño), sino también penales (privación de bienes jurídicos, ya sea patrimoniales o privación de la libertad). La consecuencia penal no se aplica por el mero incumplimiento, sino por el menosprecio al deber de solidaridad y al bienestar económico de la comunidad que el mismo significa.

La violación de los mandatos de la ley o de los reglamentos y, en especial, la realización de maniobras destinadas a sustraerse de la obligación tributaria, no importan un mero atentado a los derechos pecuniarios de un sujeto (Estado) o una desobediencia a las órdenes de la administración pública, sino que significa alterar el orden jurídico y los principios de la moral pública; por la misma razón, las sanciones tienen una finalidad *represiva* o intimidatoria, y no simplemente *reparatoria* del daño.

